SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025

En la ciudad de Salamanca, a las doce horas y catorce minutos del día veintiséis de febrero de dos mil veinticinco, se reunió en la Sala de Plenos la Junta de Gobierno en Sesión Ordinaria, bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Iglesias García con la asistencia de los Vicepresidentes 1º D. David Mingo Pérez, 2º D. Carlos García Sierra y 3ª Dª Eva Picado Valverde (telemáticamente) y de los Diputados D. Santiago Alberto Castañeda Valle, D. Marcos Iglesias Caridad, D. Antonio Agustín Labrador, Dª M.ª del Pilar Sánchez García, y, Juan Carlos Zaballos Martínez, que son los nueve Diputados que de hecho y de derecho componen la misma, asistidos por el Secretario General Alejandro Martín Guzmán y el Interventor, D. Manuel Jesús Fernández Valle.

35.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025.

Se da lectura por el Sr. Secretario del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día diecinueve de febrero de dos mil veinticinco.

Y la Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda prestarles su aprobación.

36.- EXPEDIENTE 2025/GBS_01/000078: INFORME-PROPUESTA APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO DE SALAMANCA Y LEDESMA “ADECASAL” PARA EL AÑO 2025.

Conoce la Junta de Gobierno la siguiente propuesta efectuada por el Director del Área de Bienestar Social:

“Vista la Providencia de la Diputada Delegada de Bienestar Social de: 27 de enero de 2025 dictada en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto de la Presidencia nº 3929/23, de 24 de julio de 2023- por la que se da inicio al expediente de suscripción del “Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación de Salamanca y

la Asociación “ADECASAL” para la prestación del servicio de preparado y distribución de comidas a domicilio y limpieza a domicilio, para el año 2025.

Visto el informe del Director del Área de Bienestar Social de fecha **29 de enero de 2025**, que se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el art.º 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y en el art.º 19.1 de la Ordenanza Reguladora de la concesión de subvenciones de la Diputación Provincial de Salamanca.

Vista la fiscalización del expediente que se lleva a cabo de forma favorable mediante: **Informe 47/ 2025 de fecha 14 de febrero de 2025** emitida por la Intervención provincial en aplicación del artículo 11 del Real Decreto 424/2017.

Teniendo en cuenta el Decreto de Delegación de la Presidencia Provincial en la Junta de Gobierno núm. 3927/2023 de 24 de julio, que atribuye a dicho órgano corporativo la competencia para aprobar el presente expediente, ya que, en este caso concreto, su aprobación implica un gasto cuyo importe supera los 60.000 €.

En consecuencia, con lo expuesto, por el Área de Bienestar Social se realiza la siguiente

PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO

PRIMERO: La aprobación por la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial, de la suscripción de un Convenio de Colaboración con la Asociación para el Desarrollo del Campo de Salamanca y Ledesma “ADECASAL”, con NIF G37358728 y domicilio social en la calle La Perla, nº 3 de Pino de Tormes (CP 37170), para el año 2025.

SEGUNDO: La aprobación del texto del convenio de colaboración con dicha Asociación ADECASAL para el año 2025 que consta en el expediente electrónico Número: 2025/GBS_01/000078, en informe firmado por el Director del Área de Bienestar Social con el conforme del Secretario General y con el Código Seguro de Verificación. IV7VET2CPD6OZX7ZWJOTAIPVDY.

TERCERO: Autorización y disposición del gasto derivado de dicha suscripción por importe de ciento quince mil euros (115.000,00 €) teniendo en cuenta que para ello existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente en la aplicación presupuestaria 2025/N/60/2310A/4623700 “CONVENIO ASOCIACIÓN ADECASAL ASISTENCIA DOMICILIARIA”, de conformidad con el documento de retención de crédito RC núm. 202500004838 expedido por la Intervención Provincial.”

Y la Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes, eleva a acuerdo la propuesta anteriormente transcrita.

37.- EXPEDIENTE 2025/GBS_01/000080: INFORME-PROPUESTA APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN ALCÁNDARA “PROYECTO HOMBRE” PARA EL AÑO 2025.

Conoce la Junta de Gobierno la siguiente propuesta efectuada por el Director del Área de Bienestar Social:

“Vista la Providencia de la Diputada Delegada de Bienestar Social de 27 de enero de 2025 - dictada en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto de la Presidencia nº 3929/23, de 24 de julio de 2023- por la que se da inicio al expediente de suscripción del “Convenio de Colaboración entre la Excm. Diputación de Salamanca y la Fundación Alcándara-Proyecto Hombre, para el año 2025.

Visto el informe del Director del Área de Bienestar Social de fecha 30 de enero de 2025 - Dicho informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el art.º 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y en el artº. 19.1 de la Ordenanza Reguladora de la concesión de subvenciones de la Diputación Provincial de Salamanca.

Vista la fiscalización del expediente que se lleva a cabo de forma favorable mediante Informe 48/2025 de fecha 14 de febrero de 2025 emitido por la Intervención provincial en aplicación del artículo 11 del Real Decreto 424/2017.

Teniendo en cuenta el Decreto de Delegación de la Presidencia Provincial en la Junta de Gobierno núm. 3927/23 de 24 de julio, que atribuye a dicho órgano corporativo la competencia para aprobar el presente expediente, ya que, en este caso concreto, su aprobación implica un gasto cuyo importe supera los 60.000 €.

En consecuencia, con lo expuesto, por el Área de Bienestar Social se realiza la siguiente

PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO

PRIMERO: Aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración con la Fundación Alcándara - “Proyecto Hombre” con CIF G37390960, para el año 2025.

SEGUNDO. - Que se proceda a aprobar el texto del convenio de colaboración con la Entidad la Fundación Alcándara - “Proyecto Hombre” para el año 2025 que consta en el expediente electrónico Número: 2025/GBS_01/000080, firmado por el Director del Área de Bienestar Social con el conforme del Secretario General y con el Código Seguro de Verificación: IV7VEXCTFRJ7QVBCS4UW55CAAE

TERCERO. - Que se proceda a autorizar y disponer el gasto derivado de dicha suscripción por importe de setenta y cinco mil euros (75.000,00 €), teniendo en cuenta

que, para ello, existe consignación presupuestaria en la aplicación 2025/N/60/2310D/4802900 “CONVENIO PROYECTO HOMBRE”, de conformidad con el documento de retención de crédito RC núm. 202500005096, expedido por la Intervención Provincial.

Y la Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes, eleva a acuerdo la propuesta anteriormente transcrita.

38.- EXPEDIENTE 2025/GRH_01/000538: INFORME SOBRE SOLICITUD DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA PARA CUIDADO DE FAMILIARES, HIJO MENOR DE TRES AÑOS, DE UNA FUNCIONARIA INTERINA DE ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.

Conoce la Junta de Gobierno del siguiente informe efectuado por el Coordinador de Recursos Humanos:

“ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Dña. Bárbara Cuesta Vasallo es funcionaria interina, en la categoría de enfermera, adscrita a la Residencia Mixta de Ciudad Rodrigo del Área de Bienestar Social de la Diputación de Salamanca.

Segundo.- La interesada solicita excedencia por cuidado de familiares, para atender al cuidado de un hijo menor de 3 años, con efectos del 18 de febrero hasta el 21 de marzo de 2025, ambos inclusive.

Tercero.- En el expediente personal de la interesada, existe documentación acreditativa de que su hija nació el 29 de mayo de 2024.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. - Normativa aplicable.

El régimen jurídico aplicable a los funcionarios públicos está condicionado por el reparto competencial que en esta materia ha trazado el art. 149.1. 18.^a de la Constitución, en virtud del cual corresponde al Estado la competencia exclusiva para la fijación del régimen estatutario de los funcionarios de las Administraciones Públicas. No obstante, nos encontramos ante un marco legislativo en el que concurren la normativa estatal y autonómica, como así señala la STC 84/1982 (F.Jco. 4º). La normativa básica estatal en materia de función pública se regula en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del

Empleado Público. En su artículo 3.1 dispone que *“El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local”*. Tal referencia a la “legislación estatal” ha de entenderse circunscrita a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, cuyas previsiones tienen el carácter de básicas, y el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, que, de conformidad con las previsiones de la Disposición Transitoria 1ª de la Ley 7/1985, su contenido tiene en algunos casos carácter básico y en otros será una legislación meramente supletoria de la de las Comunidades Autónomas.

El artículo 140 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, dispone:

“1. Las situaciones en que pueden hallarse los funcionarios de carrera de la Administración local serán las siguientes:

- a) Servicio activo.*
- b) Servicio en Comunidades Autónomas.*
- c) Excedencia forzosa o voluntaria.*
- d) Servicios especiales.*
- e) Suspensión.*

2. Dichas situaciones se regularán por la normativa básica estatal, y por la legislación de función pública de la respectiva Comunidad Autónoma y, supletoriamente, por la legislación de los funcionarios de la Administración del Estado, teniéndose en cuenta las peculiaridades del régimen local”.

El artículo 110 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, atendiendo a la atribución competencial recogida en el art. 32.3 de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, por la que se aprueba la reforma del Estatuto de Autonomía, dispone que *“Las situaciones administrativas de los funcionarios de la Administración Local se regirán por lo dispuesto en la presente Ley en lo no regulado por la legislación estatal, teniéndose en cuenta las peculiaridades del régimen local”*.

En consecuencia, las situaciones administrativas en que pueden hallarse los funcionarios de carrera de la Administración local se rigen por la normativa básica estatal (Real Decreto Legislativo 5/2015 TREBEP) y por la legislación de función pública de la Comunidad Autónoma (Ley 7/2005 de la Función Pública de Castilla y León) y, sólo supletoriamente, por la legislación de los funcionarios de la Administración del Estado, sin perjuicio de las peculiaridades del régimen local. Dentro del respeto a tales normas,

es de aplicación igualmente el Acuerdo Marco vigente para el Personal Funcionario de la Diputación de Salamanca.

Segundo. - Alcance de la normativa básica estatal.

El Estatuto Básico del Empleado Público ha reducido al mínimo, reservándose únicamente la regulación de las situaciones administrativas que considera claves para definir el marco común, hasta el punto de que las situaciones administrativas en las que se puede encontrar una persona funcionaria no tienen por qué ser las mismas en todas las administraciones públicas españolas, siempre que se respeten las comunes (servicio activo, servicios especiales, servicio en otras administraciones públicas, excedencia y suspensión de funciones), según se desprende del Art. 85.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

El artículo 85 del Real Decreto Legislativo 5/2015 TREBEP contempla como situaciones administrativas básicas de los funcionarios de carrera: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia y suspensión de funciones. Tal regulación no agota la regulación en la materia ni constituye una enumeración cerrada, sino que el punto segundo del mismo precepto habilita a las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto para regular otras situaciones administrativas de los funcionarios de carrera, en los supuestos, en las condiciones y con los efectos que en las mismas se determinen, cuando concurra, entre otras, alguna de las circunstancias siguientes:

a) Cuando por razones organizativas, de reestructuración interna o exceso de personal, resulte una imposibilidad transitoria de asignar un puesto de trabajo o la conveniencia de incentivar la cesación en el servicio activo.

b) Cuando los funcionarios accedan, bien por promoción interna o por otros sistemas de acceso, a otros cuerpos o escalas y no les corresponda quedar en alguna de las situaciones previstas en este Estatuto, y cuando pasen a prestar servicios en organismos o entidades del sector público en régimen distinto al de funcionario de carrera.

Dicha regulación, según la situación administrativa de que se trate, podrá conllevar garantías de índole retributiva o imponer derechos u obligaciones en relación con el reingreso al servicio activo.

Por otro lado, la Disposición Final Cuarta del citado Estatuto, en su apartado 2 indica que “Hasta que se dicten las leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de desarrollo se mantendrán en vigor en cada Administración Pública las normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos en tanto no se opongan a lo establecido en este Estatuto”.

Tales disposiciones y las circunstancias concurrentes conllevan la necesaria aplicación de la legislación sobre Función Pública de la Comunidad Autónoma, en tanto en cuanto no se oponga a la regulación básica prevista en el R. D. Legislativo 5/2015 TREBEP.

Tercero. - Situación administrativa.

Respecto a la situación administrativa en la que pasaría a encontrarse la interesada cabe encuadrarla en la de excedencia voluntaria por cuidado de familiares regulada en el artículo 92.1 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, que dispone: *“Los funcionarios tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.. El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de ésta pondrá fin al que se viniera disfrutando. Esta excedencia constituye un derecho individual de los funcionarios. En caso de que dos funcionarios fueran titulares del derecho a disfrutarlo por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios. El período de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, consolidación de grado personal y derechos pasivos. Durante el primer año, los funcionarios tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaban. Transcurrido este período, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual nivel y retribución (...)”*

Si bien dicha situación no se regula en el Estatuto Básico del Empleado Público, es de aplicación a los funcionarios de la Administración Local de Castilla y León, en virtud de lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, habida cuenta que no se opone a la norma básica estatal, que ésta habilita la regulación de otras situaciones por las leyes de Función Pública de desarrollo y que mantiene vigencia la legislación previa que no se oponga a su articulado en tanto en cuanto se dicten tales leyes de desarrollo.

Por otro lado, el precepto mencionado no efectúa distinciones en cuanto al régimen y tipo de relación de servicio del funcionario en el nuevo puesto, de lo que deriva su aplicación en cualquiera de tales regímenes y tipos de relación de servicio, y, además, adquiere un carácter residual respecto de las distintas situaciones en que el funcionario sigue prestando servicios en el sector público, en tanto refiere *“y no les corresponda quedar en otra situación”*, en contraposición con la situación de Servicio en otras Administraciones Públicas, que regula el artículo 88 del Estatuto Básico del Empleado Público.

A la vez, tal situación administrativa viene contemplada en el artículo 26 del Acuerdo Marco para el Personal Funcionario de la Diputación de Salamanca, recogiendo similar regulación que la antedicha en su Anexo VII.

Cuarto.- Efectos.

En cuanto a los efectos de la declaración de excedencia voluntaria por cuidado de familiares, indica el artículo 92 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, que . *”El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de ésta pondrá fin al que se viniera disfrutando. Esta excedencia constituye un derecho individual de los funcionarios. En caso de que dos funcionarios fueran titulares del derecho a disfrutarlo por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios. El período de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, consolidación de grado personal y derechos pasivos. Durante el primer año, los funcionarios tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaban. Transcurrido este período, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual nivel y retribución (...)”*

En cuanto al plazo para solicitar el reingreso, se establece en el Anexo VII del Acuerdo Marco vigente en esta Diputación, que *“una vez producido el cese en esta situación, se deberá solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo máximo de un mes”*. En el caso que nos ocupa la interesada ya ha fijado en su solicitud de excedencia la fecha de reingreso al servicio activo, el 19 de marzo de 2025.

Quinto.- Competencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 34.1.h) y o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y el artículo 61.12.g) del R.O.F., corresponde al Presidente de la Corporación la declaración de las situaciones administrativas de todo el personal, competencia que ha sido delegada en la Junta de Gobierno mediante Decreto de la Presidencia con transcrito nº 3857/23, de 18 de julio.

En virtud de lo anterior, se efectúa la siguiente

PROPUESTA:

Primero.- Declarar a la funcionaria de carrera Dña. Bárbara Cuesta Vasallo en situación administrativa de excedencia voluntaria por cuidado de familiares, regulada en el artículo 92 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, y en el art. 26.4 del Acuerdo Marco para el personal funcionario de la Diputación de Salamanca, con efectos desde el día 18 de febrero del 2025 y permaneciendo en dicha situación administrativa, conforme a los términos expresados en su solicitud, hasta el 21 de abril del 2025, fecha a partir de la cual se producirá el reingreso al servicio activo.

Segundo.- Durante la situación de excedencia no devengará retribuciones ni le será computable el tiempo permanecido en tal situación a efectos de concursos y derechos pasivos, si bien será computable a efectos de trienios en los términos del citado art. 92 de la Ley 7/2005.

Tercero.- Notificar la resolución a la interesada, indicándole que esta resolución pone fin a la vía administrativa pudiendo interponer contra la misma recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Salamanca, en el plazo de dos meses, o bien con carácter potestativo, alternativamente, recurso de reposición ante el Presidente de la Diputación en el plazo de un mes, contado en ambos casos desde el día siguiente a la notificación.

Tal es el informe que emite quien suscribe, cuyo criterio eleva a la consideración de ese órgano, que resolverá como estime oportuno.”

Y la Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes, eleva a acuerdo la propuesta anteriormente transcrita.

39.- EXPEDIENTE 2025/GRH_01/000556: INFORME SOBRE SOLICITUD DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO, DE UN FUNCIONARIO DE CARRERA DE ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.

Conoce la Junta de Gobierno del siguiente informe efectuado por la Técnico de Administración General de Recursos Humanos:

ANTECEDENTES

Primero. – En fecha 28 de mayo de 2024 fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca nº 102 Convocatoria de concurso específico para la provisión definitiva del puesto de trabajo de oficial/a superior del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento de la Diputación Provincial de Salamanca (en adelante concurso).

Segundo. - Por Resolución de la Presidencia nº 6333/24 de 13 de noviembre se procede a resolver la convocatoria antedicha adjudicando con carácter definitivo el puesto nº 40321 Oficial/a Superior SPEIS a D. Luis Damián Ramos Pereira.

Resolución que fue notificada a D. Luis Damián Ramos Pereira el día 14 de noviembre de 2024 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca nº 226 de 20 de noviembre de 2024.

Tercero. - En fecha 20 de noviembre de 2024 tuvo entrada en el Registro de la Diputación Provincial de Salamanca, con número de registro de entrada REGAGE24e00087611255, escrito presentado por D. Luis Damián ramos Pereira por el que solicita ser declarado en situación de excedencia por incompatibilidad por prestación de servicios en el sector público.

Sobre los referidos antecedentes han de considerarse los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. – El presente informe propuesta se emite en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 93 y 94 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Salamanca en relación con el artículo 175 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Segundo. – Régimen Jurídico.

Será de aplicación, en lo que proceda, la siguiente normativa:

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local; la Ley 30/1984, de 2 de Agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública en lo que no se oponga o haya derogado el Real Decreto Legislativo 5/2015; la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y Programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local; el Reglamento por el que se aprueba la normativa de calidad de los procedimientos selectivos de la Diputación de Salamanca (BOP 23-3-94); la Ley 53/1984, de 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; así como por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado y demás disposiciones concordantes.

Tercero. - Legitimación.

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC), D. Luis Damián Ramos Pereira ostenta la condición de interesado por resultar adjudicatario del puesto nº 40321 convocado por el concurso y por tanto posee la legitimación necesaria para actuar frente a esta Administración.

Cuarto. – Antecedentes, resumen del escrito presentado.

D. Luis Damián Ramos Pereira, tal como consta en el certificado de servicios prestados aportado junto con su solicitud de participación en el concurso y al que remite expresamente en su escrito, con carácter previo a la adjudicación de forma definitiva el puesto nº 40321 de la relación de puestos de trabajo de la Diputación Provincial de Salamanca a resultas de la resolución del concurso, se encuentra prestando servicios en el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca como Jefe de Servicio de extinción de incendios y salvamento desde el día 1 de marzo de 2016 hasta la actualidad.

El puesto nº 40321 de la relación de puestos de trabajo de la Diputación Provincial de Salamanca que le ha sido adjudicado por concurso, reúne las siguientes características:

Puesto	40321	Denominación	Oficial/a Superior SPEIS	Tipo de puesto	S
Área	Fomento	División	Gestión Servicios Urbanos/464 –Protección Civil-SPEIS/4640- Servicios Centrales.		
Tipo de personal	Funcionario	Grupo	A1		
CD	26	Código CE	006	Importe anual CE	20.275,80 €

En base a lo anterior, D. Luis Damián Ramos Pereira, expone en su escrito que dentro del plazo de la toma de posesión opta por continuar en servicio activo en el puesto que ocupa en el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca solicitando su pase a la situación administrativa de excedencia por incompatibilidad por prestación de servicios en el sector público en el puesto adjudicado por concurso.

Quinto. – Tramitación.

La tramitación del procedimiento deberá adecuarse a lo dispuesto en los artículos 53 y siguientes de la LPAC y, en lo que pudieran ser de aplicación, demás preceptos de la normativa señalada en el fundamento de derecho segundo a este caso concreto.

El expediente se tramitará por el Área de Organización y Recursos Humanos, en atención a lo establecido en el artículo 92 del Reglamento Orgánico.

Sexto. – Competencia.

Conforme a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen local (en adelante LBRL) corresponde la resolución del procedimiento al Presidente de la Diputación Provincial de Salamanca.

Por otro lado, por Resolución de la Presidencia nº 3857/23 de 18 de julio, el Presidente de la Diputación Provincial de Salamanca resuelve delegar en la Junta de Gobierno la declaración de situaciones administrativas y la jubilación del personal al servicio de la Corporación.

Séptimo. – Análisis de la normativa aplicable a este supuesto.

El objeto fundamental a analizar, considerando lo planteado en su escrito, radica en determinar si, de acuerdo con la normativa aplicable, procede declarar al interesado en situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.

En relación con la situación planteada, es importante señalar que no existe criterio uniforme, fijo o consolidado en relación con la interpretación y aplicación del artículo 10 de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas (en adelante Ley 53/84) ni desde la óptica de la doctrina científica ni en el seno de la doctrina jurisprudencial.

Si bien la corriente jurisprudencial predominante a día de hoy al respecto, es la que resulta reflejada en las resoluciones a las que más adelante se hará referencia.

Por lo anterior, se procede a exponer los concretos preceptos que, según criterio de quien suscribe, han de resultar de aplicación al supuesto planteado junto con la interpretación o sentido que la jurisprudencia les otorga, al objeto de concluir de la forma más objetiva en la resolución de lo solicitado.

Derecho de acceso a funciones y cargos públicos.

El artículo 23.2 de la Constitución Española, consagra el derecho fundamental de los ciudadanos a “*acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos [...]*” derecho fundamental que está ligado al derecho a conservar la plaza obtenida por procedimientos de movilidad, según la siguiente resolución que se hace eco de la doctrina constitucional en relación con la interpretación de este precepto para los procedimientos de provisión.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nº 126/2021 de 1 de marzo: El derecho a conservar la plaza obtenida por procedimiento de movilidad determinante de acceso a la misma está vinculado al derecho de acceso y permanencia en los cargos públicos como afirmo el Tribunal Constitucional en la sentencia 5/1983, razonando que “el derecho a acceder a los cargos públicos comprende también el derecho de permanencia en los mismos, porque de otro modo el derecho fundamental quedaría vacío de contenido” habiendo precisado el mismo Tribunal en la sentencia 60/1982 que “cabe

inferir del art. 23.2 de la CE que, si todos los ciudadanos tienen el derecho de acceder a cualquier cargo público, también tienen el derecho de dimitir de ellos, decisión que se inserta en la esfera de la libre disposición individual y que, no estando prohibida está permitida”, de manera que bajo dicho criterio, podemos afirmar que el titular del derecho de renuncia es el funcionario pero no la Administración, que ni puede imponerla ni mucho menos coaccionarla[...].

Adquisición de la condición de empleado público.

El artículo 62.1 del TREBEP enumera los requisitos a los que ineludiblemente han de darse cumplimiento para adquirir la condición de funcionario de carrera, siendo el enumerado en su apartado d), el último que se debe cumplir para que la adquisición de dicha condición sea efectiva salvo la excepción recogida por la **Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 17 de julio de 2019**: “[...] el único supuesto en que la ausencia de toma de posesión no comporta la pérdida del derecho a la plaza en el sector público viene dado por el caso de quien, ostentando la condición de funcionario en activo, al obtener nueva plaza, asimismo en el sector público, por superar el procedimiento selectivo, opta dentro del plazo de toma de posesión por la plaza originaria, decisión que le coloca en situación de excedencia [...]”

Derecho de opción.

El artículo 10 de la Ley 53/84 regula el derecho de los empleados públicos, en el supuesto de obtención de un segundo puesto en el sector público incompatible con el que venían desempeñando, de optar por alguno de los dos puestos, derecho cuyo ejercicio la jurisprudencia interpreta del siguiente modo:

Por todas, **Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nº 126/2021 de 1 de marzo**: “[...] La Ley 53/1984 de 26 de diciembre de incompatibilidades es normativa básica con alcance general, y cuando fija la obligación de opción entre plazas o puestos incompatibles lo hace como técnica para resolver una situación de incompatibilidad para el desempeño simultáneo de los mismos. En cuanto norma prohibitiva, que afecta al derecho al desempeño de trabajo o empleo, ha de ser objeto de interpretación restrictiva, especialmente cuando la incompatibilidad material se salva con el deber del afectado de optar libremente entre ambas plazas o puestos sin necesidad de imponer la medida más amplia y desproporcionada de imponer la renuncia irreversible a la plaza obtenida.

El derecho subjetivo del recurrente a optar por una u otra plaza deriva del artículo 10 de la Ley de Incompatibilidades, normativa legal que, como queda dicho, tiene carácter básico, y como tal no admitiría medida en contrario por ninguna otra disposición estatal o autonómica, al no haberse establecido excepción o condicionante al ejercicio de este derecho de opción.

En consecuencia, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Incompatibilidades debe efectuarse la opción dentro del plazo de toma de posesión, de manera que la Administración a cuyo cuerpo, escala o categoría ingresa, deberá facilitársela pues el procedimiento de ingreso o de adquisición de la condición de funcionario de carretera se ultima por imperativo del apartado d) del artículo 62 del EBEP con la “Toma de posesión dentro del plazo que se establezca”, diligencia de toma de posesión que se reduce a la mera constancia ritual y formal en los caso de opción por la plaza o puesto de origen, pese que resulta obligada para la Administración respecto del aspirante aprobado pues caso contrario perdería su condición de funcionario de esta última Administración, condición obtenida por procedimiento objetivo en concurrencia para el acceso a la plaza.”

Situación administrativa: Excedencia voluntaria por encontrarse en situación de servicio activo en otro cuerpo o Escala de otra Administración Pública.

Finalmente, el artículo 91.1 de la Ley 7/2005 de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León determina lo siguiente: “Procederá declarar en situación de excedencia voluntaria a los funcionarios cuando se encuentren en situación de servicio activo en otro Cuerpo o Escala de cualquiera de las Administraciones Públicas, o pasen a prestar servicios en Organismos o Entidades del Sector Público y no les corresponda quedar en otra situación.”

En este sentido, la **Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Vigo nº 54/2023 de 30 de marzo** dispone lo siguiente: “[...] resultando plenamente incompatible el desempeño simultáneo de servicios [...] el demandante tenía derecho a optar por uno u otro; este derecho lo ejerció cuando presentó escrito el 26 de septiembre de 2022 (dentro del plazo de toma de posesión) [...] en que comunicaba su opción por continuar en el servicio activo [...].

Con base en ese conocimiento, [...] tendría que haberle declarado en situación de excedencia por prestación de servicios en el sector público; era la Administración competente para ello, dado que la plaza sacada a concurso en la Oferta de Empleo Público era suya, así como en su ámbito competencial se desempeña el puesto de trabajo anudado a dicha plaza.

Así pues, ante la constancia de la opción manifestada por el demandante, solo cabría, obligadamente, por el Ayuntamiento demandado acceder a dicha pretensión dado que estaba vinculado legalmente por lo dispuesto en el artículo 10 ya citado.”

Octavo. – Conclusiones.

Del análisis de lo expuesto en el punto séptimo, y considerando las circunstancias concretas de la solicitud, ha de concluirse que D. Luis Damián ejerció el derecho de opción previsto en el artículo 10 de la Ley 53/84 dentro del plazo establecido en la base decimotercera de la convocatoria.

Habiendo ejercitado este derecho en plazo, estimando que el criterio jurisprudencial predominante en la actualidad ha de guiar la interpretación de la normativa aplicable a este supuesto y la resolución de lo solicitado por el interesado, procede, a juicio de quien suscribe, resolver lo siguiente:

Declarar a D. Luis Damián Ramos Pereira en excedencia voluntaria por encontrarse en situación de servicio activo en otro Cuerpo o Escala de otra Administración Pública desde el día 20 de noviembre de 2024, fecha de presentación del escrito del que trae causa el presente informe, en aplicación del artículo 39 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con los efectos que a dicha situación administrativa le correspondan de acuerdo con la normativa vigente en cada momento durante el tiempo de permanencia en la misma.

En consecuencia, y en base a la exposición jurídica aquí enumerada, puede formularse la siguiente,

PROPUESTA

Primero. – Declarar a D. Luis Damián Ramos Pereira en excedencia voluntaria por encontrarse en situación de servicio activo en otro Cuerpo o Escala de otra Administración Pública, desde el día 20 de noviembre de 2024 con los efectos que a dicha situación administrativa le correspondan de acuerdo con la normativa vigente en cada momento durante el tiempo de permanencia en la misma.

Segundo. – Notifíquese la resolución al interesado, informándole de que esta resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer alternativamente recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien, interponer directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Salamanca, en el plazo de dos meses, contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con lo señalado en el artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa. Todo ello sin perjuicio de que pueda Vd. interponer cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.”

Y la Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes, eleva a acuerdo la propuesta anteriormente transcrita.

RUEGOS Y PREGUNTAS

No se formularon.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las doce horas y diecisiete minutos, extendiéndose la presente Acta, que firma conmigo el mismo y de cuyo contenido, como Secretario General doy fe.

EL PRESIDENTE,

EL SECRETARIO GENERAL,

DILIGENCIA. - Para hacer constar que este Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del día veintiséis de febrero de dos mil veinticinco, contiene dieciséis folios numerados del al y foliados del ciento seis al ciento veintidós.

EL SECRETARIO GENERAL,